

Minuta proyectos fusionados limites o prohibiciones a transacciones en efectivo

<p>Boletín N° 15462-03 Modifica el Código de Comercio con el objeto de limitar los montos de pago en efectivo en el comercio</p>	<p>Senadores Sepúlveda Orbenes y Velásquez Núñez</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ninguna persona, con excepción de bancos, instituciones financieras y del Banco Central, puede recibir pagos en dinero en efectivo por sumas superiores al equivalente a 5 UTA (\$3.954.060). - En caso de detectarse un incumplimiento a esta obligación, el adquirente del pago podrá ser sancionado con multa de un 10% de lo pagado, a beneficio fiscal.
<p>Boletín 16.783.03 para limitar el monto de las transacciones que se realicen en dinero efectivo. (no se hace referencia a ninguna ley a modificar)</p>	<p>Senadores Rincón, Cruz-Coke, Edwards, Pugh y Sanhueza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se prohíbe el pago en dinero efectivo de las transacciones que superen las 50 UF (\$1.879.000). - Excepción persona natural que no tenga domicilio en Chile, el importe será de US \$10.000, siempre que no actúe en calidad de empresario o profesional. - Crea un cuerpo legal nuevo - Contempla sanciones equivalentes al 25% del monto de la operación - Responsabilidad solidaria de quienes intervengan en la operación - Prescripción de un año

Boletín 16764-03 modifica la ley N° 19.913, que crea la UAF y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo para transacciones que se realicen en dinero efectivo	Senadores María José Gatica, Pugh, Gastón Saavedra y Sanhueza.	<ul style="list-style-type: none"> - Se prohíbe la utilización de dinero en efectivo para todo pago que sea superior a las 135 Unidades de Fomento (poco más de 5 millones de pesos). - Dicha transacción se debe realizar mediante otro medio de pago.
--	--	--

El gobierno plantea que se debe modificar la LOC del Banco Central a propósito de los límites de montos que se plantean y la obligación de percibir el pago de una obligación en dinero nacional.

Ante los distintos montos, no aparece cual sería la razón para determinarlo. Se debe considerar la situación de feriantes, comerciantes menores o el mundo agrícola. Se debe analizar el límite que se determine. Impidiendo el uso de efectivo provoca limitaciones en sectores de la población que no están bancarizados.

La cuenta RUT tiene límites en transferencia que se realiza. Lo mismo con otros productos bancarios (cuentas corrientes) que limitan el monto de transacción diario.

Proponen invitar al Ministerio de Hacienda, a la CMF y al BancoEstado para analizar la idea matriz de los proyectos.

Senadora Carvajal: Se debe precisar si las limitaciones se referirán a personas naturales o jurídicas, así como considerar ciertas costumbres y prácticas comerciales de personas, en especial, de personas del mundo rural o más vulnerable. Invitar a representantes de cámaras de comercio. Se debe saber si existen medidas para reforzar la seguridad en las transacciones electrónicas.

Pugh: es relevante mirar la trazabilidad del dinero y en relación al límite ya existe uno como es el monto de dólares para viajar.

Indicaciones al proyecto de ley que establece RUF - Boletín N° 15.805-07.

comentarios de profesores [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] investigador Centro de Derechos Humanos, profesor Departamento Ciencias Penales de la Facultad de Derecho, Universidad de Chile. / [REDACTED] Profesor Asistente, Centro de Derechos Humanos, Universidad de Chile / [REDACTED], Investigadora adjunta y profesora de derecho penal y procesal penal, Universidad Diego Portales / [REDACTED], Académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, Universidad de la Frontera.

Artículo	Texto:	Fundamento
Artículo 2, numeral 2	“Nunca deberá ser disparado de manera rasante ni de manera directa al rostro.”	Establecer en la definición de armas no letales esta prohibición, atendido el antecedente 400 mutilados, con lesiones en sus ojos y rostros durante el estallido social
Al Artículo 3 para sustituir en el numeral 4	“racional” por la palabra “proporcional”.	Remitirse a lo que sigue

Al artículo 3 para agregar nuevo numeral	<p>Principio de proporcionalidad: El grado de fuerza empleada y el daño que puede razonablemente resultar, debe considerar el nivel de resistencia o gravedad de la agresión y asegurar el resguardo de la seguridad e integridad del personal y la de terceros. Los medios empleados deben ser proporcionales con la resistencia ofrecida, la agresión sufrida o por la magnitud del peligro existente a la integridad del personal o de terceros. Por aplicación de este principio no se requiere igualdad de los medios empleados en relación con la agresión sufrida por el personal o terceros.</p>	<p>El principio de proporcionalidad es exigido en el Sistema Universal de DDHH, en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir de 1979, que establece en su artículo 3 que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas, lo que implica que el uso de la fuerza es excepcional y puede usarse en la medida en que razonablemente sea necesario, restringida por el principio de proporcionalidad”. (Naciones Unidas, «Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», 1979, artículo 3, letra b). En la misma línea, los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego de 1990, establecen, por ejemplo, que si el empleo de las armas de fuego es inevitable, los funcionarios: «a) ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;» (Naciones Unidas, «Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», 1990, numeral 5).</p>

		<p>El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también conocido como "Tribunal de Estrasburgo") se ha referido a casos en que se vulnera el principio de proporcionalidad, considerando que, aunque el uso de la fuerza pueda resultar necesario, debe lograrse un equilibrio entre el objetivo y los medios, apreciando desproporción en la dispersión de una manifestación en la que utilizó una ametralladora, producto de lo cual un manifestante murió. (Caso Güleç con Turquía, párr. 71).</p> <p>Omitir la consagración del principio de proporcionalidad en la ley resultaría de suma gravedad. Se sugiere no innovar en una materia tan delicada.</p> <p>Cabe mencionar que la exigencia de proporcionalidad no sólo está dada por el Sistema de DDHH. También a nivel de derecho administrativo, se consagra como un requisito de actuación de los órganos de la administración del Estado. Cuando se trata de los organismos que tienen el monopolio del uso de la fuerza, ello es aún más evidente. Tal es así que, desde el año 2022 el artículo 2° quáter de la LOC N°18.961 (Carabineros) y el artículo 1° ter del DL 2460 (PDI), establecen una norma específica sobre uso de la fuerza, que se refiere al principio de proporcionalidad. La norma en cuestión reza:</p>
--	--	--

		<p>“[La Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile, según el caso], como institución integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se encuentra autorizada para hacer uso de la fuerza, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción o medida requerida para el desempeño de las funciones policiales.</p> <p>Con todo, siempre en la medida de lo posible, se preferirá la utilización de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza”.</p> <p>No hacer mención al principio en las RUF implica un claro e incomprensible retroceso en la materia, generando incertidumbre para los propios funcionarios policiales.</p>
Al Artículo 3, siguiente nuevo numeral,	Principio de gradualidad: El personal deberá utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armamento, los que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo legítimo, siempre que con ello no se	Asociado a la proporcionalidad. El proyecto de ley original contenía una referencia a este principio de proporcionalidad, sin embargo, en el primer trámite constitucional, no fue aprobado. Es por ello que Amnistía Internacional sugirió que se incorpore el principio de proporcionalidad conforme a los estándares internacionales sobre reglas de uso de la fuerza, además de delimitarlo con precisión, ya que este principio implica que la fuerza cause el menor daño posible en relación con la amenaza sufrida por una persona o un grupo de

	<p> cree un riesgo de muerte o de lesiones graves a su integridad física o a la de terceros.”.</p>	<p> personas y que para dimensionar su magnitud se considere tanto la gravedad del delito como el objetivo legítimo que se persigue. Esto último implica que el principio de proporcionalidad sirva para determinar si existe equilibrio entre los beneficios del uso de la fuerza y sus posibles consecuencias dañinas.</p>
<p>Al Artículo 4, para sustituir el texto del inciso primero del artículo por el siguiente:</p>	<p>“Artículo 4.- Formación y capacitaciones. El personal deberá contar con formación y capacitaciones debidamente certificadas para la aplicación de la presente ley. Éstas deberán realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá ejecutarse por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por las Fuerzas Armadas.”</p>	<p>En el texto del artículo 4to no se indica a las fuerzas armadas. Señalar expresamente que la formación y las capacitaciones en RUF deben ser certificadas.</p>
<p>Al Artículo 4, para eliminar la frase:</p>	<p>“sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria.”</p>	<p>Resulta poco conveniente consagrar por ley que la provisión al personal del equipamiento policial, dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Ello porque el equipamiento es relevante desde una doble perspectiva: por una parte, porque permite proteger a los propios funcionarios, proteger su vida e integridad física, y también la de terceros; y, por otra parte, porque el contar con equipamiento</p>

		<p>adecuado reduce el recurso al uso de la fuerza, sobre todo a fuerza letal.</p> <p>Así se ha establecido en los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, al señalar que los Estados deben dotar a los funcionarios de equipo autoprotector, [...] a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo (Naciones Unidas, «Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley», 1990, numeral 2).</p>
<p>Al Artículo 5, Para agregar el siguiente inciso final al numeral 5:</p> <p>OJO LA INDICACION ES AL ARTICULO 6, NUMERAL 5</p>	<p>“La rendición de cuentas contemplará procedimientos de supervisión y evaluación permanente de procedimientos y equipos, así como la dictación e implementación de recomendaciones del ministerio encargado de la seguridad o del Ministerio de Defensa según corresponda.”</p>	<p>Incorporar esto el deber de rendición de cuentas: la supervisión y evaluación permanente de procedimientos y equipos.</p>

Al Artículo 6 1.- Para eliminar en su numeral 3 la frase:	“que la circunstancia operativa lo permita y”.	En el deber de advertencia se utiliza esta frase que es poco precisa y subjetiva. Lo relevante es que la aplicación de este deber no cree un riesgo en la persona del uniformado o a la de terceros, en caso de que sea necesario emplear armamento, al dar una advertencia verbal o una señal corporal de su intención de utilizarlo.
Al artículo 6, para eliminar en su numeral 6 la frase:	“que la situación operativa lo permita y”.	En el Deber de prestar auxilio en caso de uso de la fuerza, lo relevante es que no se cree un riesgo de muerte o lesiones graves de su persona o de terceros, si a propósito del uso de la fuerza resultan terceras personas heridas y deben auxiliarlas. Se utiliza esta frase que es poco precisa y subjetiva.
Al artículo 6, Para incorporar en el número 7, en su primer inciso, a continuación	“En aquellos incidentes en que se haya hecho uso de la fuerza deberán ser registrados, por cualquier medio idóneo para estos efectos, ya sea soporte electrónico, documental, audiovisual u otros si es que hubiere,	Precisar los medios de respaldo a la labor y acción de los funcionarios, relacionado con contar con medios disuasivos adecuados y de registro.

del punto aparte, lo siguiente:	de acuerdo a lo establecido en los reglamentos respectivos.”	
Al Artículo 7 Para sustituir en el numeral 4	la palabra “afectaciones” por la palabra “lesiones”	El uso de la fuerza se realiza para evitar lesiones o la muerte del personal o de terceros.
Al Artículo 8 Para eliminar en su numeral 5 la frase:	“cumplimiento del deber, legítima defensa,”	<p>si de lo que se trata en este artículo es de establecer normas habilitantes para el uso de la fuerza, o criterios para su uso, nada tienen que hacer mencionadas allí las causas de justificación como el cumplimiento de un deber o la legítima defensa. Es un tribunal quien luego de analizar en un caso concreto, determina si el funcionario policial se ajustó a las RUF, estableciendo si esa conducta está justificada por cumplimiento de un deber o por legítima defensa, por lo que la mención de ellas en este numeral me parece que no corresponde.</p> <p>Algo similar ocurre con la mención al cumplimiento de una orden judicial, con la detención de la persona que opone resistencia a la autoridad, con la persona que se fuga o con la protección de</p>

		<p>infraestructura crítica. Todas esas actuaciones eventualmente podrían quedar amparadas por una causa de justificación, -y en ese sentido, están en un plano distinto a la legítima defensa y al cumplimiento de un deber, mencionados anteriormente lo que habrá de ser determinado por un tribunal, según las circunstancias del caso; pero no corresponde que estén mencionadas dentro de un numeral de un artículo que está explicando, en abstracto, cuáles son las etapas del uso de la fuerza, en tanto, norma habilitante o norma que establece criterios para su uso.</p>
<p>Al Artículo 12 Para eliminar en inciso relativo a la Regla N°3 la frase:</p>	<p>“cumplimiento del deber, legítima defensa,”</p>	<p>Mismo argumento que en la indicación anterior.</p>
<p>Al Artículo 15 Para sustituir dicho</p>	<p>“La observancia por parte del personal de las reglas de uso de la fuerza establecidas en la presente ley hará aplicables las circunstancias</p>	<p>Indicación del ejecutivo en la cámara. Supera los defectos del artículo 15 que Respecto del artículo 15, incisos primero y segundo, referidos a presunción de actuar en cumplimiento de un deber, y presunción de actuar en legítima defensa, una apreciación común respecto a ambos</p>

<p>artículo por el siguiente:</p>	<p>eximentes de responsabilidad penal contempladas en la ley.”</p>	<p>incisos, es que me parece que se está insistiendo en una “sobre regulación” de estas materias. Es decir, el Código Penal ya regula el cumplimiento de un deber y ejercicio legítimo de una autoridad o cargo; así como la legítima defensa. E incluso ya contiene una presunción de legítima defensa para funcionarios policiales o de FF.AA. ejerciendo labores de orden público, incorporada por la Ley N°21.560, conocida como Ley “Nain Retamal”.</p> <p>Por otra parte, el Código de Justicia Militar (respecto de Carabineros) y el DL de la PDI también se refieren a estas eximentes, cuando existe uso de armas.</p> <p>Las eximentes se vuelven a mencionar acá, en el proyecto de ley, una ley que -de aprobarse- podríamos denominar de carácter administrativo, extra penal, en que pareciera que el legislador está tomando partido por una regulación del uso de la fuerza en dicha área del derecho. Regular el uso de la fuerza al alero del derecho administrativo ciertamente parece adecuado. Sin embargo, la mención de causas de justificación penales en dicho contexto resulta confusa.</p> <p>En efecto, la mención una y otra vez de causas de justificación, en el contexto actual, en que existen normas referidas a lo mismo en diferentes cuerpos normativos, lo que logra es una constante</p>
-----------------------------------	--	--

		<p>superposición de regulaciones, que no necesariamente conversan entre sí, generando graves problemas interpretativos.</p> <p>Por otra parte, las presunciones en cuanto tales resultan poco recomendables en esta materia, en atención a que justamente los estándares internacionales, en particular los establecidos por la Corte IDH en la materia, instan por una prohibición, como regla general, del uso de la fuerza letal y armas de fuego, estableciendo que su uso debe estar formulado por ley y ser interpretado restrictivamente, de tal forma que no exceda al absolutamente necesario (Ayala, Carlos y María Daniela Rivero (2014). «Derecho a la vida». En Cristian Steiner y Patricia Uribe (coordinadores), Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada (pp. 123-124).</p> <p>El establecimiento de presunciones, aunque sean simplemente legales y admitan prueba en contrario, va en la línea absolutamente opuesta a la exigencia de una interpretación restrictiva.</p>
ARTÍCULO NUEVO	<p>“Artículo- Incorpórase, a continuación del artículo 321 del Código Procesal Penal, el siguiente artículo 321 bis:</p> <p>“Artículo 321 bis.- Peritajes en procedimientos sobre uso de la fuerza policial o militar. En investigaciones de hechos que revistan carácter de delito</p>	<p>Se da mayores facultades al Ministerio público para recurrir a una mirada especializada y técnica de las propias instituciones armadas y policiales.</p>

	<p>relativos al ejercicio de la fuerza por funcionarios de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público podrá presentar como peritos a miembros de los organismos técnicos pertenecientes a dichas instituciones.”.”.</p>	
--	---	--

Impacto económico del crimen organizado en Chile

I.- Introducción.

El crimen organizado en Chile ha evolucionado y crecido en complejidad en los últimos años, siendo una preocupación creciente para las autoridades y la ciudadanía. El crimen organizado, en términos generales, es un concepto utilizado ampliamente para hacer referencia a actividades delictivas cometidas por grupos de personas en forma organizada. El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o asociaciones ilegales realizan negocios legítimos.

La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, conocida como Convención de Palermo, definió en la letra a) del artículo 2° lo que es un grupo delictivo organizado: *“un grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúa concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”*.

En nuestro país el tipo penal que se utilizó para abordar este fenómeno criminal fue el de asociación ilícita, pero paulatinamente se han ido incorporando diversas normas legales que han ido conformando un tramado legal que permite abordar las diversas actividades que se llevan a cabo por estas estructuras criminales que se desempeñan en distintos mercados criminales como son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, así como delitos como el robo de cobre, de salmónes y de madera. Es así como Chile suscribió la mencionada Convención de Palermo en diciembre de 2004 y abordó la realidad del crimen organizado con la Ley N° 20.000 (que sanciona el tráfico ilícito drogas), la Ley N° 17.798 de Control de Armas, la Ley N° 18.314 (ley antiterrorista, cuestionada por su efectividad), entre otras

iniciativas que se han visto en la actualidad incrementadas a partir de la agenda Anti-delincuencia del actual gobierno acordada con el Congreso Nacional.

A pesar de lo anterior, el avance territorial y la complejidad que ha adquirido este fenómeno han exigido una regulación más acuciosa y moderna. Así, el 2023 se mejoró el tipo penal de la asociación ilícita en el Código respectivo, en su artículo 292, definiéndosela como “toda organización formada por tres o más personas, con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos”.

La criminalidad organizada, desde el punto de vista estructural, se caracteriza por su organización que adopta distintas modalidades: jerárquica, horizontal, celular o en red, y en ella intervienen colectivos de personas, ya sea en las empresas o incluso en la forma estricta de la organización criminal. Se caracterizan por la magnitud de sus efectos que son inicialmente económicos, pero también políticos y sociales, teniendo una capacidad de desestabilización general de los mercados.

El poder del crimen organizado es tal, que tiene la capacidad de insertarse en todos los aspectos que mueven a un país: en lo económico, en la política, en la institucionalidad pública y en la sociedad civil, impactando en los mercados lícitos, en la percepción ciudadana de seguridad pública, en la salud pública, en la violencia social con la perpetración de crímenes más violentos y con uso de armas de fuego, en la presencia de bandas criminales, en la corrupción de instituciones públicas y del sector privado, etc., debilitando y desestabilizando regiones y países:

“según estimaciones de la UNODC, la delincuencia organizada transnacional genera 2,1 billones de dólares por año, lo que equivale al 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) Mundial. Por su parte, estimaciones del Fondo Monetario Internacional cifran el lavado de dinero mundial anual entre 2% y 5% del PIB mundial” (Crimen Organizado: Análisis y Desafíos para Chile)

Es así como el crimen organizado penetra en todas las esferas, y produce efectos económicos y sociales con un fuerte impacto en la estabilidad democrática, en la economía y en la vida de las personas.

Finalmente, podemos señalar que el crimen organizado en Chile se caracterizaba “por redes delictivas descentralizadas, en su mayoría clanes familiares anónimos, que operan en barrios marginales y están involucrados en el tráfico de drogas, el contrabando, el tráfico de personas y la trata de personas. Estas redes son mayoritariamente territoriales, utilizan niveles de violencia que han ido en aumento y coordinan sus operaciones con actores extranjeros, con presencia a nivel transnacional, y en ese caso coordinando el tráfico de armas, drogas y contrabando” (Global Initiative Against Transnational Crime. 2021).

Esto ha ido cambiando en el corto plazo con la presencia de bandas criminales de origen extranjero

II.- Efectos Económicos del crimen organizado en Chile.

Podemos analizar el impacto en el ámbito económico del crimen organizado con la siguiente afirmación que da cuenta de lo dañino en la economía de las actividades ilícitas:

“la proliferación de actividades ilícitas socava la vida colectiva y los valores democráticos debilitando progresivamente a las instituciones y por tanto, afectando el desarrollo y la gobernabilidad de nuestro país.” (Comercio ilícito y crimen organizado, una mirada local para un problema global”, ALEUY)

El crimen organizado y la corrupción desvían y distorsionan partes significativas del PIB; lo que tiene un impacto negativo en el potencial de crecimiento de un país. El Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES) de la Pontificia Universidad Católica de Chile realizó la investigación “Costo Económico de la Delincuencia: Chile 2013-2022”, para cuantificar el costo económico de la delincuencia en Chile durante la última década. Este estudio estableció que si en el año 2013 la delincuencia representaba 1,4% del

PIB, en el año 2022 la delincuencia pasó a ser 2,1 %: “Se multiplicó por 50% y ese aumento lo ha pagado principalmente el sector privado” (<https://clapesuc.cl/en-los-medios/el-dano-de-la-delincuencia-en-la-economia-casi-se-duplica-y-los-privados-asumen-el-mayor-coste>)

Por su parte, los delitos de alta connotación social impactan también en la economía nacional. Es así como Juan José Obach, director ejecutivo de Horizontal señala: “Desde un punto de vista macro, desde Horizontal estimamos que el aumento del 14% de robos con violencia e intimidación el segundo trimestre del 2022 se asoció con una caída del producto de 0,9% del PIB” (<https://www.latercera.com/pulso/noticia/economistas-ven-efectos-de-la-mayor-inseguridad-en-la-economia-le-restaria-hasta-3-decimas-anuales-al-pib/DWISBFMH35AZNDAR6R23BBKUIY/#>)

El crimen organizado se articula en función de distintos mercados ilícitos. En la Política Nacional Contra el Crimen Organizado (2022) se identificaron los siguientes mercados ilícitos: tráfico de droga, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, contrabando, cibercrimen y delitos como el robo de madera y de cobre.

Pía Lizana, investigadora de AthenaLab, calculó el año pasado el impacto de las economías ilegales en sectores productivos: “pérdidas por \$12 mil millones en la minería, US\$ 300 millones en la pesca y casi US\$ 68 millones en la madera. El 6 de diciembre, AthenaLab organizará un seminario sobre los efectos en distintos rubros.” (<https://www.latercera.com/pulso/noticia/economistas-ven-efectos-de-la-mayor-inseguridad-en-la-economia-le-restaria-hasta-3-decimas-anuales-al-pib/DWISBFMH35AZNDAR6R23BBKUIY/#>)

Como vemos, el accionar del crimen organizado tiene efectos económicos significativos en Chile, que se manifiestan de diversas maneras siendo amplios en sus efectos y perjudicando la estabilidad económica y su crecimiento, así como a las instituciones, estabilidad económica y financiera, obstaculizan el crecimiento y tienen consecuencias de largo alcance.

El lavado de dinero y la circulación de fondos ilícitos ocasionan una degradación del sistema financiero, al instalarse la práctica de “blanqueo” de los dineros generados por la actividad del crimen organizado. Para ello usan de empresas y actividades legales

Las prácticas comerciales desleales fomentadas por organizaciones criminales – como el contrabando y el comercio ilegal - crean un entorno desfavorable para el desarrollo empresarial y sus negocios. Las actividades ilegales pueden distorsionar los mercados legítimos. Por ejemplo, el contrabando de productos afecta a las empresas legales que no pueden competir con los precios más bajos de productos ilegales. El aumento del trabajo informal que en 2017 (INE) llegó que 1 de cada 3 personas estuvieran en esta categoría. Es decir, que 2,5 millones de personas hoy en Chile tienen un trabajo informal, correspondiente al 29,1% de la población con ocupación, que en general se desempeñan en trabajos precarios y comercio ambulante.

La presencia de crimen organizado puede desalentar la inversión extranjera. Los inversores tienden a evitar países o regiones con altos niveles de criminalidad debido al riesgo de extorsión, secuestro y daños a la propiedad.

Las actividades ilegales como el tráfico de drogas, contrabando y lavado de dinero evaden impuestos, lo que resulta en una disminución de los ingresos fiscales. Esto limita la capacidad del gobierno para invertir en servicios públicos y desarrollo.

Por otra parte, las prácticas de corrupción pueden llevar a la exención del pago de impuestos, lo que priva de ingresos fiscales. Además, la extorsión, el soborno y el lavado de dinero relacionados con el crimen organizado erosionan la confianza en las instituciones, lo que lleva a que la población cuestione el valor de la democracia y del sistema económico y tributario.

Por otra parte, el Estado debe destinar recursos para combatir el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Esto desvía fondos de otras inversiones en servicios esenciales como salud, educación y seguridad social.

Por otro lado, las personas y empresas también deben asignar recursos para protegerse del crimen organizado y la violencia, lo que reduce la disponibilidad de recursos para otras inversiones productivas.

A su vez, los altos niveles de delincuencia pueden afectar la actividad turística, por la peligrosidad de una ciudad y su calificación como tal por otros países con la consiguiente advertencia a sus ciudadanos. Es así como tenemos el caso de la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar:

“la Embajada de Estados Unidos envió una dura advertencia a sus ciudadanos alertando sobre los peligros de visitar Viña y Valpo. En el comunicado, la embajada sugiere mantener un perfil bajo, no aceptar ayuda de extraños y no dejar objetos de valor en los vehículos.”
(<https://www.turisteandoando.cl/noticias/2023/11/04/inseguridad-en-vina-del-mar-y-valparaiso-preocupa-a-eeuu.html>)

La necesidad de combatir el crimen organizado incrementa los gastos en seguridad pública. Esto incluye mayores presupuestos para la policía, sistemas judiciales y penitenciarios, además de inversiones en tecnología de vigilancia.

La inseguridad no sólo involucra una mayor necesidad de tomar medidas de protección, por la población común, pero también por las empresas que deben invertir en seguridad ante robos de envergadura y más sofisticados, pero también evalúan sus proyectos de inversión considerando un mayor costo en seguridad o riesgo de pérdidas por robos.

Esto significa aumento de costos y eventualmente el desincentivo para invertir en un determinado proyecto asociado a una determinada localidad, como es el caso de las empresas forestales en la Macrozona Sur “Corma cifra en \$167 mil millones las pérdidas por el robo de madera en los últimos tres años”.(<https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/05/03/1129722/corma-robo-madera-macrozona-sur.html>)

Mauricio Olavarría, de la Universidad de Santiago, y Rodrigo Saens, de la Universidad de Talca, han encabezado por separado sendas cuantificaciones del

efecto económico del crimen. Recientemente, Saens estimó el daño en un equivalente entre 2,5% y 3% del PIB. (<https://www.latercera.com/pulso/noticia/economistas-ven-efectos-de-la-mayor-inseguridad-en-la-economia-le-restaria-hasta-3-decimas-anuales-al-pib/DWISBFMH35AZNDAR6R23BBKUIY/#>)

El desbaratamiento de la economía del crimen organizado es uno de los 10 ejes de la Política Nacional Contra el Crimen Organizado, buscando que la respuesta estatal permita la incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y “la lucha contra el lavado de activos, a la luz de las amenazas y riesgos actuales, logrando mejor efectividad”.

Estas distintas actividades delictivas, y sus niveles de violencia asociados, impactan de tal manera que no solo generan preocupación en los actores económicos y temor en la población, sino que también dudas en efectividad de la acción de las instituciones propias de la democracia y en el Estado.

En conclusión, el crimen organizado en Chile tiene efectos económicos profundos y diversos que afectan tanto al sector público como al privado, perjudicando el desarrollo económico y la calidad de vida de los ciudadanos.

III.- Efectos Sociales del crimen organizado en Chile.

El crimen organizado cobra miles de vidas y genera enormes costos sociales en América Latina y en nuestro país. Por ello ya el año 2003 la Organización de Estados Americanos (OEA) ha señalado al crimen organizado, junto con el terrorismo, como las nuevas amenazas “que afectan la seguridad de los Estados del hemisferio” (ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 2003)

Fenómenos como el tráfico de drogas –el negocio más visible de las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región–, de armas y de migrantes, generan enormes recursos económicos para esos grupos, cuyo poder

contrasta con la debilidad de muchos Estados que carecen de las capacidades para combatirlos eficazmente:

“En algunos casos se observan dinámicas de captura del Estado por parte de estructuras criminales o, incluso, de cooperación entre dichas estructuras y actores políticos y económicos legales” MATHIEU, Hans / NIÑO GUARNIZO, Catalina. 2011. *Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá, Colombia. p. XV. ISSN 2216-1082

El crimen organizado tiene una serie de efectos sociales profundos en Chile, que afectan tanto a individuos como a comunidades. En donde el Estado incurre en enormes gastos para perseguir y reprimir la delincuencia organizada, y por otro, las propias familias afectadas pueden enfrentar costos, como por ejemplo de discapacidad producto de lesiones, hospitalización, costos de seguridad contra el delito, costos de transporte, entre otros, y, por cierto, la presencia de un clima de inseguridad que afecta las actividades y vida cotidiana de las personas en sus hogares, sus lugares de trabajo y sus trayectos en la ciudad. El crimen organizado suele estar asociado con altos niveles de violencia, incluyendo homicidios, secuestros y enfrentamientos entre bandas rivales. Esto genera un ambiente de inseguridad y miedo en barrios y comunidades.

Por otra parte, la presencia de actividades criminales puede llevar a la desintegración de comunidades. Las familias pueden ser desplazadas de sus hogares debido a la violencia, y las redes de apoyo comunitario pueden debilitarse. Especial impacto tiene el narcotráfico en la vida cotidiana de muchas mujeres vulnerables que comienza a generar ingresos con el microtráfico (con la consiguiente presencia de mujeres condenadas por este tipo de delitos) y en jóvenes socialmente vulnerables, quienes son reclutados por organizaciones criminales, perpetuando un ciclo de marginalidad, pobreza y criminalidad.

Las actividades delictivas debilitan las redes comunitarias, de colaboración y de participación a nivel barrial, al instalarse redes delictivas, basadas en la

amenaza, la violencia, lo que genera el debilitamiento de la cohesión comunitaria, con la consiguiente desconfianza en las instituciones de todo tipo, desde una organización comunitaria o deportiva hasta las policías y el poder estatal.

Por otra parte, la corrupción asociada al crimen organizado puede erosionar la confianza en las instituciones públicas, incluyendo las policías y el sistema judicial:

“Según el Foro Económico Mundial, el costo global de la corrupción se estima en al menos 2,6 billones de dólares; equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Además, según el Banco Mundial, tanto empresas como individuos desembolsan anualmente más de 1 billón de dólares en sobornos.”
<https://clapesuc.cl/en-los-medios/el-dano-de-la-delincuencia-en-la-economia-casi-se-duplica-y-los-privados-asumen-el-mayor-cost>

Estos efectos resaltan la necesidad de políticas públicas eficaces y un enfoque integral que aborde no solo la represión del crimen organizado, sino también la prevención y la rehabilitación social. El quehacer criminal no solo viene aumentando en escala y recurriendo a medios cada vez más violentos desafiando al Estado valiéndose de métodos altamente evolucionados para evadir la justicia y lavar el dinero proveniente de sus actividades.

Los costos sociales se expresan en la pérdida de confianza en las instituciones, la desconfianza en las policías, la sensación de ausencia del estado, la corrupción de las redes a nivel comunitario o su eliminación y reemplazo por redes criminales, los costos humanos directos por la violencia, el miedo y la pérdida de vidas, lo que afecta el bienestar de la población.

El crimen organizado en Chile ha evolucionado y crecido en complejidad y en origen en los últimos años, siendo una preocupación creciente para las autoridades y la ciudadanía. Es así como nuestro país ha pasado de ser un país de tránsito a uno de consumo y producción de drogas, o por otra parte, la migración ha impactado con la presencia de bandas organizadas de origen en otras naciones.

Por otra parte, la trata de personas, asociadas a redes delictivas, especialmente con fines de explotación sexual y laboral, operan en Chile, aprovechándose de la vulnerabilidad de migrantes, en especial de mujeres: “El Reporte Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que sus víctimas corresponden mayoritariamente a mujeres y niñas, y que el rubro más frecuente es la explotación sexual.” Este tipo de delitos se ha ido incrementando en los últimos años: “...las organizaciones criminales han encontrado un negocio en cruzar la frontera hacia Chile...” (Política Nacional Contra el Crimen Organizado)

Otro aspecto es la informalidad laboral que tiene como telón de fondo el contrabando de productos como cigarrillos, ropa y tecnología es otro aspecto significativo del crimen organizado. Estas actividades afectan tanto la economía formal como los ingresos fiscales del país.

Por otra parte, en un aspecto reciente de la presencia del fenómeno es la existencia de una subcultura que cada vez más asoma a la superficie especialmente por la presencia de líderes delictivos a nivel barrial, con presencia en redes sociales con la exhibición de dinero, drogas y armas, así como la presencia de grafitis y narco mausoleos en determinados barrios.

La violencia, el miedo y la pérdida de vidas humanas afectan el bienestar de la población, generando un ambiente general de inseguridad:

“La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (Enusc) 2022, presentada el 24 de noviembre de este año, indica que la percepción de inseguridad llegó a su máximo histórico en Chile, alcanzando un inédito 90,6%.” ([https://doble-espacio.uchile.cl/2023/12/22/crisis-de-seguridad-en-chile-homicidios-migraciones-y-politica/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20Urbana%20de%20Seguridad%20Ciudadana%20\(Enusc\)%202022%2C,un%20in%C3%A9dito%2090%2C6%25.](https://doble-espacio.uchile.cl/2023/12/22/crisis-de-seguridad-en-chile-homicidios-migraciones-y-politica/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20Urbana%20de%20Seguridad%20Ciudadana%20(Enusc)%202022%2C,un%20in%C3%A9dito%2090%2C6%25.))

Bibliografía

1.- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

<https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf>

2.- GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL CRIME. 2021) *Indice Global de Crimen Organizado*, Chile.
https://ocindex.net/assets/downloads/spanish/ocindex_profile_chile.pdf. p. 4.

3.- SALINERO, Sebastián. “El crimen organizado en Chile. Una aproximación criminológica al perfil del delincuente a través de un estudio a una muestra no representativa de condenados por delitos de tráfico de estupefacientes”. *Política Criminal*, Vol. 10, N° 19 (Julio 2015), pp. 25-55.
[http://www.politicacriminal.cl/Vol_10/n_19/Vol10N19A2.pdf]

4.- BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Decreto 369. Aprueba Política Nacional Contra el Crimen Organizado. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Url Corta: <https://bcn.cl/3dq5n>)

5.- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 2003.. *Declaración sobre Seguridad en Las Américas* (Aprobada en la tercera sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos, celebrada los días 27 y 28 de octubre, Ciudad de México. p.4.

6.- BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL. Código Penal.

7.- BALMACEDA, HERNANDEZ y ALFARO, Jorge. Costo Económico de la Delincuencia: Chile 2013-2022”. Documento de trabajo N°127 Centro UC Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES).

8.- GREENE, MEERSOHN, ASTRAÍN Y SALAS “Crimen Organizado: Análisis y Desafíos para Chile” *Revista de Derecho y Ciencias Sociales* N° 29 (241-277), 2023, Universidad San Sebastián I.S.S.N. 2735-7902

9.- ALEUY, Mahmud. COMERCIO ILÍCITO Y CRIMEN ORGANIZADO, UNA MIRADA LOCAL PARA UN PROBLEMA GLOBAL Observatorio del Comercio Ilícito (OCI) es una iniciativa pionera en Chile que nace el 10 de mayo 2016 bajo el alero de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (CNC)

10.- MATHIEU, Hans / NIÑO GUARNIZO, Catalina. 2011. *Anuario 2011 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe*. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. Bogotá, Colombia. p. XV. ISSN 2216-1082

11.- ENCUESTA NACIONAL URBANA DE SEGURIDAD CIUDADANA 2023
<https://www.ine.gob.cl/enusc>

Artículos de prensa

1.- <https://www.latercera.com/pulso/noticia/economistas-ven-efectos-de-la-mayor-inseguridad-en-la-economia-le-restaria-hasta-3-decimas-anuales-al-pib/DWISBFMH35AZNDAR6R23BBKUIY/#>

2.- <https://clapesuc.cl/en-los-medios/el-dano-de-la-delincuencia-en-la-economia-casi-se-duplica-y-los-privados-asumen-el-mayor-cost>

3.- <https://www.icare.cl/contenido-digital/revive-la-semana-economica-capitulo-6/>

4.- <https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/05/03/1129722/corma-robo-madera-macrozona-sur.html>

5.- <https://www.turisteandoando.cl/noticias/2023/11/04/inseguridad-en-vina-del-mar-y-valparaiso-preocupa-a-eeuu.html>

6.- [https://doble-espacio.uchile.cl/2023/12/22/tesis-de-seguridad-en-chile-homicidios-migraciones-y-politica/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20Urbana%20de%20Seguridad%20Ciudadana%20\(Enusc\)%202022%2C,un%20in%3%A9dito%2090%2C6%25](https://doble-espacio.uchile.cl/2023/12/22/tesis-de-seguridad-en-chile-homicidios-migraciones-y-politica/#:~:text=La%20Encuesta%20Nacional%20Urbana%20de%20Seguridad%20Ciudadana%20(Enusc)%202022%2C,un%20in%3%A9dito%2090%2C6%25)

Indicaciones al proyecto de ley que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las fuerzas de orden y seguridad pública y de las fuerzas armadas en las circunstancias que se señala.

Boletín N° 15.805-07.

Al Artículo 2

Para incorporar al final del numeral 2, a continuación del punto aparte, lo siguiente:

“Nunca deberá ser disparado de manera rasante ni de manera directa al rostro.”

Al Artículo 3

1.- Para sustituir en el numeral 4 la palabra “racionalmente” por la palabra “proporcionalmente”.

2.- Para agregar el siguiente nuevo numeral, que pasa a ser el número 6:

“6. Principio de proporcionalidad: El grado de fuerza empleada y el daño que puede razonablemente resultar, debe considerar el nivel de resistencia o gravedad de la agresión y asegurar el resguardo de la seguridad e integridad del personal y la de terceros. Los medios empleados deben ser proporcionales con la resistencia ofrecida, la agresión sufrida o por la magnitud del peligro existente a la integridad del personal o de terceros. Por aplicación de este principio no se requiere igualdad de los medios empleados en relación con la agresión sufrida por el personal o terceros.”

3.- Para agregar el siguiente nuevo numeral, que pasa a ser el número 7:

“7. Principio de gradualidad: El personal deberá utilizar medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza y de armamento, los que solo podrán utilizarse cuando otros medios menos lesivos resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo legítimo, siempre que con ello no se cree un riesgo de muerte o de lesiones graves a su integridad física o a la de terceros.”.

Al Artículo 4

1.- Para sustituir el texto del inciso primero del artículo por el siguiente:

“Artículo 4.- Formación y capacitaciones. El personal deberá contar con formación y capacitaciones debidamente certificadas para la aplicación de la presente ley. Éstas deberán realizarse de forma periódica y su cumplimiento deberá ejecutarse por las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por las Fuerzas Armadas.”

2.- Para eliminar en el inciso final del artículo la frase a continuación de la coma (,): “sin perjuicio de las limitaciones que imponga la disponibilidad presupuestaria.”, reemplazando la coma por un punto final (.).

Al Artículo 5

Para agregar el siguiente inciso final al numeral 5:

“La rendición de cuentas contemplará procedimientos de supervisión y evaluación permanente de procedimientos y equipos, así como la dictación e implementación de recomendaciones del ministerio encargado de la seguridad o del Ministerio de Defensa según corresponda.”

Al Artículo 6

1.- Para eliminar en su numeral 3 la frase:

“que la circunstancia operativa lo permita y”.

2.- Para eliminar en su numeral 6 la frase:

“que la circunstancia operativa lo permita y”.

3.- Para incorporar en el número 7, en su primer inciso, a continuación del punto aparte, lo siguiente:

“En aquellos incidentes en que se haya hecho uso de la fuerza deberán ser registrados, por cualquier medio idóneo para estos efectos, ya sea soporte electrónico, documental, audiovisual u otros si es que hubiere, de acuerdo a lo establecido en los reglamentos respectivos.”

Al Artículo 7

Para sustituir en el numeral 4 la palabra “afectaciones” por la palabra “lesiones”

Al Artículo 8

Para eliminar en su numeral 5 la frase:

“cumplimiento del deber, legítima defensa,”

Al Artículo 12

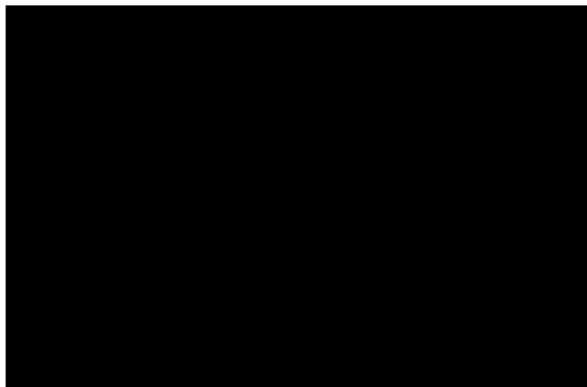
Para eliminar en inciso relativo a la Regla N°3 la frase:

“cumplimiento del deber, legítima defensa,”

Al Artículo 15

Para sustituir dicho artículo por el siguiente:

“La observancia por parte del personal de las reglas de uso de la fuerza establecidas en la presente ley hará aplicables las circunstancias eximentes de responsabilidad penal contempladas en la ley.”



Senador Gastón Saavedra Ch.

Mecanismo para aumentar el ahorro.

Se acordó incrementar la cotización en un 6%, con cargo al empleador, además de incluir una modernización del mecanismo de cobranza, tal como se proponía en el proyecto original del gobierno. Asimismo, se debería hacer obligatoria la cotización adicional de los trabajadores independientes, con la gradualidad correspondiente y avanzar en un seguro de lagunas.

Mecanismos para elevar el retorno e incrementar la competencia: Se acordó no separar la industria administradora de fondos de pensiones y mantener la comisión por flujo.

Afiliados-licitación.

También hubo consenso en licitar paquetes del stock de afiliados según lo propuesto en el proyecto, permitiendo que los afiliados decidan no participar del proceso o bien que puedan cambiarse de AFP una vez licitados. La mayoría estuvo de acuerdo en que el mecanismo para conformar el grupo a licitar debería ser como lo propone el proyecto (aleatorio), aunque también hubo opiniones a favor de que fuera por invitación. También se acordó adoptar los fondos generacionales, permitiendo el traspaso de activos y asegurando no impactar el mercado financiero.

Pensión Garantizada Universal (PGU).

Se decidió recomendar no aumentar la cobertura del 90% al 100% como lo propone el proyecto. En cuanto al aumento a \$250 mil, no hubo acuerdo, pero sí en que la PGU debería tener como referencia a la línea de la pobreza.

Aseguramiento frente a riesgos sobrevivientes o inherentes, asegurando suficiencia de los beneficios: Hubo consenso en compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida y que el bono tabla sea un componente permanente del nuevo seguro social. No hubo acuerdo respecto al beneficio dentro de una misma generación (intrageneracional) en los términos en que está diseñado en el proyecto.

Modalidades adicionales de aseguramiento.

Se acordó que haya solidaridad entre generaciones (intergeneracional) por un período transitorio, focalizado en mujeres y en grupos que cotizan más años. Para aquellos que cotizan durante la transición a este seguro, se acordó que todos deberían recibir beneficios.

Se evaluaron alternativas de grupos y montos, y sus impactos, aunque esto requiere mayor profundización.

Hubo acuerdo también en que, al haber excedentes en el seguro social debido a que el beneficio intergeneracional comienza a extinguirse, el remanente de las cotizaciones se destine a las cuentas individuales de los cotizantes con solidaridad intrageneracional.

Respecto al bono tabla hubo acuerdo para que este sea un componente de solidaridad permanente financiado con la cotización.

Se discutió la opción de que la cotización del seguro asociada al componente intergeneracional sea un préstamo, sin embargo, algunos consideraron que no es una buena iniciativa debido a las consecuencias fiscales.

Reformas institucionales.

Hubo acuerdo en que es necesario fortalecer la Superintendencia de Pensiones, transformándola en un cuerpo colegiado, en forma similar a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). A su vez hubo consenso en modificar el rol del Consejo Consultivo Previsional, en la participación del Consejo Fiscal Autónomo sobre el análisis de la sostenibilidad fiscal del sistema previsional y en una mejora de la comisión de usuarios del sistema de pensiones.